


# Derechas en el poder: los casos de Colombia, Perú y Chile

**Ava Gómez Daza**

Mg. en Estudios Latinoamericanos

**Nicolás Lynch**

Dr. en Sociología

**Pedro Santander**

Dr. en Lingüística

## Introducción

¿Cuán asumible es “ser de derecha” en América Latina, a una década y media de la aparición del eje “posneoliberal”?. En el caso de países con procesos de cambio parece que es parte del “pasado neoliberal”, ¿y en los países gobernados por la derecha?

¿Cómo gobiernan los gobiernos de derecha en esta nueva etapa latinoamericana? ¿Exactamente igual a cuando la hegemonía neoliberal era férrea en todo el continente? ¿Qué componentes hay de continuidad y cuáles de cambio en cada caso nacional? ¿hay alguna línea en común en este sentido a nivel regional? ¿por ejemplo un cambio/moderación en el discurso que ya no es tan abiertamente neoliberal? ¿o sigue siéndolo?

La crisis del neoliberalismo dio paso en diferentes países de la región al surgimiento de fuerzas de nueva izquierda que lograron llegar al poder, en otros casos la derecha consiguió conservar sus posiciones, pero no sin una reconfiguración de sus discursos, hoy *aggiornados* al clima de época que vive América Latina, donde, a diferencia de lo que ocurre en otros rincones del mundo, el programa neoliberal no parece tener grandes posibilidades de triunfar en las urnas. Hay ciertos componentes que nos permiten pensar que estamos asistiendo a una nueva reconfiguración del campo de la derecha, a la emergencia de unas *derechas del siglo XXI*, que se caracterizan por su reacomodamiento al contexto político y social que los oficialismos progresistas y de izquierdas han ido creando en América Latina desde iniciado el siglo XXI.



En aquellos países donde las derechas son oposición, surgieron nuevos liderazgos y fuerzas políticas por fuera de las tradicionales estructuras partidarias –de la misma manera que en el campo de la izquierda emergieron liderazgos como el de Chávez, Correa o Evo Morales-, mientras que allí donde se mantienen en el poder la reconfiguración pasa por una re-lectura de los nuevos intereses y subjetividades de las mayorías sociales.

Con el ánimo de comenzar a delinear una lectura regional que nos permita dar cuenta de las líneas de continuidad pero sobre todo de los componentes novedosos que aparecen en las estrategias para gobernar de estas "derechas en el poder", este escrito aborda los casos de Colombia, Perú, y el caso particular de Chile, donde los resortes del poder siguen estando en manos de sectores de derecha, a pesar de los importantes movimientos en términos de reconfiguración del campo popular que se viene produciendo en los últimos años.

Las derechas en el poder en estos países tienen, claramente, rasgos políticos propios que han sido analizados en profundidad por Camilo Soares, para el caso paraguayo, Pedro Santander para el caso chileno y Ava Gómez Daza con Colombia. Sin embargo, existen algunos elementos comunes en el ejercicio del poder y su posicionamiento ideológico de facto, a partir de los cuales vale la pena intentar el esfuerzo de una lectura regional, con miras a una caracterización amplia de los rasgos comunes de las "derechas en el poder" en la América Latina del siglo XXI.

De especial relevancia resulta el concepto de "bicefalia" que puede ser de utilidad para pensar cómo estos gobiernos -particularmente en el caso de Chile y Perú-presentan una clara disociación entre los discursos electorales, teñidos de consignas progresistas y voluntad de cambio, con las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio de gobierno. Esta notable disociación en algunos casos es producto de un deliberado uso de consignas progresistas de alta aceptación social, como las inversiones en educación y salud y fortalecimiento de la soberanía nacional y la integración regional han sido apropiados como capital discursivo electoral, para luego, al momento de ejercer el poder, dejarlas de lado por razones de "fuerza mayor". En otros -y esta es una constante en todos los Estados gobernados por la derecha, aunque también en los que son gobernados por tendencias políticas progresistas moderadas- los marcos normativos vigentes fueron diseñados bien durante gobiernos de facto (como en el caso de Chile, cuya constitución es de raigambre pinochetista; el de Perú (sancionada tras el autogolpe de Fujimori; el de Guatemala, sancionada bajo el gobierno del general Mejía Victores; la constitución paraguaya, sancionada bajo el primer gobierno de Rodríguez Pedotti) o durante la década hegemónica del neoliberalismo en la región, como en el caso de Colombia (1991). Estos diseños político-institucionales tienen una fuerte impronta liberal que otorga especial importancia a la propiedad privada, no prevén mecanismos suficientes para prevenir y combatir las prácticas corruptas y los expolios a los bienes públicos, y el reconocimiento de derechos sociales y económicos es muy limitado. En este sentido, los gobiernos de derechas en la región ejercen su poder anclados en estructuras normativas derechizadas que no parecen dispuestos a modificar. Así, los elementos progresistas de sus campañas

quedan en el plano discursivo, mientras profundizan las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la primarización de la economía y el expolio privado de los recursos públicos.

A pesar de que buena parte de estos gobiernos gozan de escasa simpatía popular y gobiernan en medio de una profunda desconfianza y decepción de su ciudadanía respecto de la política -en parte por sus traiciones electorales y en parte por los altos niveles de corrupción que caracterizan a sus gobiernos, las alternativas que pudieran estar representando los movimientos sociales y partidos de izquierda no consiguen consolidarse electoralmente. Lejos de los llamados al "diálogo y la no confrontación", lo cierto es que estos gobiernos reprimen más o menos abiertamente las protestas y cierran espacios de deliberación y cualquier canal de expresión del descontento popular ante el deterioro de las garantías estatales para el ejercicio de los derechos sociales que, más o menos tímidamente, establecen las constituciones políticas de estos estados.

El próximo documento, del cual este es complementario, aborda Paraguay, México y Guatemala, como otros casos centrales en la configuración del mapa regional de la derecha.

## I

## La derecha bicéfala colombiana

**por Ava Gómez Daza**

Colombia es hoy un escenario peculiar para el análisis de las derechas. El presente de la política colombiana nos arroja un panorama en el que la más férrea oposición al actual Gobierno, presidido por la derecha santista, es paradójicamente, la derecha uribista.

El abierto enfrentamiento, que lleva ya varios años, ha servido para crear una suerte de clivaje "guerra-paz" que enfrenta a los dos discursos, identificados con un electorado que se ha ido polarizando. Este conflicto sólo puede ser entendido si, aunque sea brevemente, nos remontamos a la época en que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos eran, respectivamente, Presidente y Ministro de Defensa, entonces unidos bajo un nuevo paraguas político denominado Partido Social de la Unidad (o Partido de la U).

Nacido en 2005 tras la crisis de los partidos tradicionales Liberal y Conservador, el Partido de la U se convirtió en el apoyo necesario para lograr la reelección de Álvaro Uribe en 2006, cuyo Gobierno, duradero hasta el año 2010, fue un periodo caracterizado por la continuación de la política de defensa que se dio en llamar de "Seguridad Democrática". A lo largo de este cuatrienio el desempeño político, orientado fundamentalmente al combate con los grupos insurgentes, trajo algunos extremos cuyos coletazos llegan hasta la actualidad.

Por una parte, la necesidad de lograr resultados en la guerra contra las guerrillas hizo que se promoviera al interior de las fuerzas militares colombianas una práctica popularizada como los “falsos positivos”. En ella los militares asesinaban a civiles, tanto de zonas rurales como urbanas, y los señalaban falsamente como guerrilleros muertos en combate.

Además, la intensificación de la lucha contra la guerrilla produjo una nueva incursión en territorio extranjero, esta vez en Ecuador, durante el año 2008. Dicha violación del espacio nacional del país vecino desencadenó una nueva crisis que se sumó a la acaecida cuatro años atrás en Venezuela.

Ya en 2010, ante una imposible tercera reelección, Uribe confió en Santos la continuación de un proyecto de derecha orientado al combate contra la guerrilla y al enfrentamiento ideológico con los colindantes Gobiernos del eje bolivariano. De esta forma, Santos se erigió Presidente de Colombia gracias, en parte, al apoyo de su predecesor. No obstante, conforme fueron avanzando los primeros dos años de su Ejecutivo, la orientación hacia el problema de la guerra fue cambiando. Debido al menos a tres factores: por un lado, a la fuerte incidencia del cambio político en EE.UU. con un Gobierno demócrata, cuyas prioridades se alejaban de intensificar la lucha contrainsurgente en el país. Por otra parte, el insospechado “renacer económico” de la región, que dejó a Colombia, como uno de los países en la delantera, gracias al impulso de la inversión extranjera. Y, finalmente, lo obvio: más de cincuenta años de lucha antiguerrillera y un periodo de intensificación radical de la misma, como fue el inmediatamente anterior, no habían dado lugar a la reducción de un conflicto que representaba un absoluto anacronismo en el continente.

Santos fue así alejándose de la política guerrista de Uribe en todos los ámbitos, incluyendo también el cese de las habituales tensiones con los Gobiernos vecinos de Ecuador y Venezuela. Pero el punto de inflexión fue el comienzo de nuevos diálogos de paz con las FARC. La reacción no se hizo esperar y Uribe renegó de quien había sido su pupilo aventajado. Comenzaba así un enfrentamiento que ponía de nuevo sobre la mesa las dos caras de la derecha bicéfala colombiana.

*Santos, del discurso de la guerra al discurso de la paz*

El discurso de la guerra comenzó a ver su fin durante el periodo de campaña de las pasadas elecciones presidenciales de 2014, cuando Juan Manuel Santos fue reelegido en el balotaje frente a un Óscar Iván Zuluaga, representante del uribismo, con el recientemente creado Partido Centro Democrático, PCD.

En la segunda vuelta, la firme convicción de Santos de avanzar en las conversaciones de paz que habían empezado en 2012, hizo que las opciones políticas de la izquierda se decantaran por apoyarlo, aplicando la política del mal

menor. Fue así como el partido Polo Democrático Alternativo, PDA[1], liderado por Clara López; el Movimiento Progresistas, encabezado por el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro y el partido Unión Patriótica al mando de Aída Avella, en congruencia con su discurso pacifista, se plegaron a la opción de la salida negociada al conflicto. Además, diversidad de asociaciones de carácter civil contrarias a la guerra y buena parte de los círculos intelectuales colombianos se volcaron en su apoyo. También se sumaron a éste los medios de comunicación, especialmente, los de la Casa Editorial El Tiempo (que durante muchos años perteneció a la familia Santos). Asimismo lo hicieron Caracol Televisión y Blu Radio, dos importantes medios de la tradición liberal. En resumen, no importaba cómo, ni dónde, ni quién lo dijera, el apoyo al discurso de la paz fue masivo.

Este proceso de diálogo fue avalado por la mayoría electoral, en unas reñidas elecciones casi transformadas en un referendo por el fin negociado del conflicto. El cambio por la paz se estribó en dos aspectos muy importantes: en primer lugar, en el hecho que implicó la necesidad de finalizar el conflicto armado en un país lastrado durante más de medio siglo por la violencia, con un alto número de desplazados[2] y con una huella de la guerra difícil de borrar. La urgencia de superar esta situación agravada por una serie de escándalos como el ya mencionado caso de los falsos positivos o la “parapolítica”[3] y el aislamiento regional, sirvieron para poner de manifiesto la necesidad de reorientar la acción política.

En segundo lugar, este proceso se integró en un momento de expansión económica, donde fue un Gobierno (neo)liberal o de la “Tercera Vía” (criolla), el que buscó un mejor entorno para promover la inversión extranjera en el país, especialmente, esa inversión interesada en la extracción de recursos naturales, ubicados en zonas con presencia de la guerrilla.

Este segundo punto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bien ha habido un interés de diversos países en la promoción de estos diálogos, así como un tremendo ascenso de la economía colombiana en los últimos cinco años, hay que resaltar que las políticas del actual Gobierno no se han destacado por combatir la aplastante desigualdad social que sufre el país, acrecentada por una prolongada guerra. En este sentido, si bien el Gobierno de Santos estableció fuertes alianzas con la izquierda, éstas fueron más bien tácticas y no se sustanciaron en una política más redistributiva de los beneficios de la élite empresarial.

1 Salvo algunos ausentes como el Senador por el PDA, Jorge Robledo, quien se negó a apoyar a Santos en la reelección.

2 Según ACNUR, sólo entre 1997 y 2013, han sido registradas oficialmente 5.185.406 personas desplazadas internas con un impacto desproporcionado en la población afrocolombiana y las comunidades indígenas.

3 Definida por Iván Cepeda Castro, senador por el PDA como “un eufemismo que se ha utilizado para nombrar un el concierto para delinquir que conforma una mezcla mafiosa de estructuras provenientes del viejo narcotráfico, del paramilitarismo y de sectores corruptos de la política”.Información disponible en el un debate de control político realizado en 2014: http://goo.gl/fq8qMY



*Álvaro Uribe: de Juan Manuel a "Pacho" Santos*

Consciente de que el discurso de la guerra fue perdiendo cabida en las posibilidades del elector colombiano, en los últimos meses Uribe ha ido mermando su estrategia en este sentido, hasta llegar a aconsejar una vía negociada al conflicto, divergente a la del actual Gobierno. No lo hizo así con el discurso de enfrentamiento con el vecino bolivariano. Una buena muestra de ello fue su respuesta a la reactivación del conflicto fronterizo con Venezuela.

El ahora Senador Uribe, que apoya para las próximas elecciones regionales del 25 de octubre al candidato por el PCD a la Alcaldía de Bogotá, Francisco Santos (primo hermano de Juan Manuel Santos), se movilizó con un arsenal de escoltas, al río Táchira para "apoyar" a los refugiados o desplazados colombianos en su regreso a Colombia. El caricaturesco oportunismo político (figura 1) del expresidente fue aprovechado para intentar sumar puntos en una guerra casi perdida por la Alcaldía de Bogotá[4], alterando los ánimos con vallas como la de la figura 2 y reavivando el debate sobre la "flaqueza" de Juan Manuel Santos, quien una vez más se decantó por responder diplomáticamente a la decisión del mandatario venezolano.

Figura 1




Fuente: El Tiempo

Figura 2

4 Según la encuesta realizada por Cifras y Conceptos, hecha pública el martes 4 de agosto. Si los ciudadanos bogotanos tuvieran que votar al día siguiente, el 21 % de ellos lo haría por Clara López, candidata del Polo Democrático Alternativo; 20 %, por Rafael Pardo, del Partido de la U y Partido Liberal; y 19 %, por Enrique Peñalosa, exalcalde y candidato independiente con adhesión de Cambio Radical. En cuarto lugar, votarían por Francisco Santos (Partido Centro Democrático), en el cuarto lugar y con el 10% de la intención de voto.




Fuente: Semana

*Bicefalia, una condición no tan nueva*

La "derecha bicéfala" colombiana es una forma de denominar una contradicción que ha estado presente desde el surgimiento de los partidos políticos Conservador y Liberal a mediados del siglo XIX. Ésta se reforzó con una política de bloqueo institucional, en el que sólo los dos partidos "mayoritarios" podían estar en todas las instituciones públicas y en el Gobierno. El bloqueo del Frente Nacional (1958) impidió un desarrollo natural de la democracia representativa, evitando la participación de partidos de izquierda que sólo hasta principios de los años noventa (constituyente mediante), lograron hacerse hueco en el dificultoso panorama electoral. La contradicción que produjo la desaparición política de la izquierda enarboló en el poder a dos derechas de corte terrateniente y burgués institucionalizadas en el Partido Conservador y el Partido Liberal, respectivamente.

Sin embargo, al final de la década de 1990, se produjeron varios escándalos de financiación ilegal de campañas electorales[5] y se puso de manifiesto la incapacidad de dar fin al conflicto armado por medio del diálogo, durante la presidencia de Andrés Pastrana. Fue entonces cuando el férreo sistema de partidos colombiano flaqueó y se erigió en el poder un Uribe "mesiánico", dispuesto a unir a la derecha otrora bipolar. Sin embargo, su origen social (la élite terrateniente) lo llevó a decantarse por una política orientada a la guerra y a la lucha por la tierra, algo que no era del todo prioritario para la burguesía capitalina.

Sin duda, el pragmatismo político de un camaleónico Juan Manuel Santos, le permitió avizorar un cambio en la sociedad colombiana; el peso de Bogotá y la renovación demográfica que ha vivido en los últimos años, con jóvenes urbanos, pertenecientes a una sociedad global e interconectada, de corte progresista, hicieron que esta derecha burguesa se sofisticara y después de más de dos décadas en el marco de la guerra, lograra rearticular un renovado marco de la paz.

La intención de darle un vuelco a la política del país encajó perfectamente con los intereses de los empresarios colombianos, ampliamente ligados y dependientes de la inversión extranjera. Ellos también necesitaron la paz pues Colombia se había convertido en un gigante dormido; con reservas naturales por explotar, con una

5 Véase el "Proceso 8000" contra el expresidente y actual Secretario General de la UNASUR Ernesto Samper.

escasa infraestructura y dificultades en la comunicación interdepartamental, así como enormes carencias en el transporte de las grandes urbes (gratas excepciones aparte). En definitiva, Colombia sólo podía crecer y salir del letargo, a pesar de los años adaptándose a la guerra. Una guerra en la que no todos eran perdedores, buen ejemplo de ello es la "obsesión por la seguridad" y todo el negocio que de ella se desprende: industria armamentística, "reciclaje" de militares jubilados reconvertidos en escoltas y un largo etcétera.

Santos se supo adaptar, la burguesía liberal se supo adaptar, no así los terratenientes. Por ello en una jugada maestra el Presidente logró hacer su discurso poliédrico; muchas fuerzas de diversas orientaciones fueron aglutinadas tácticamente enganchando no sólo a las élites y clases medias citadinas, sino también a partidos o movimientos de la izquierda política, sin alejar a la base social que le precede. Porque Juan Manuel Santos, proviene de una estirpe política liberal que ha sabido acompasar sus intereses con las demandas de una sociedad cambiante, que si bien no se acerca —de momento— a la tendencia política regional, sí refleja una serie de intereses progresistas que, de manera transversal, ha logrado intuir e integrar de forma efectiva en su discurso.

**II**

**La derecha y la hegemonía neoliberal en el Perú**

**por Nicolás Lynch**

En el Perú se vive un panorama de contraste con el resto de América Latina. Los últimos 25 años han sido un período de construcción de una hegemonía neoliberal que ha sido más bien erosionada en el resto de la región. Una hegemonía, además, que ha tenido la capacidad de destruir, neutralizar y/o cooptar a la oposición tanto social como política, teniendo como resultado la construcción de un bastión reaccionario, donde se reúnen las derechas de otros países y se mira al resto de la región como un "espacio de reconquista" para estas oligarquías en decadencia. Es el virreinato de Abascal, uno de los últimos grandes virreyes españoles, revivido, que niega la posibilidad de la independencia de la región.

Uno de los elementos claves de esta hegemonía neoliberal es el ideológico y tiene que ver con los sucesos que dieron origen a este período.

En el Perú esto se expresa en la división de la Izquierda Unida, la guerra sucia que termina con Sendero Luminoso y el fracaso del primer gobierno de Alan García. La Izquierda Unida fue un frente de partidos de izquierda que expresaba una importante organización de movimientos sociales ocurrida en los 20 años anteriores y cuya debacle a la par que cerró un ciclo pretendió borrar una memoria de organización de la sociedad. Sendero Luminoso fue un grupo que desarrolló acciones armadas de carácter terrorista entre 1980 y 1994 y estas acciones motivaron como respuesta un terrorismo de Estado cuyas consecuencias, por

acción y reacción, pesan hasta hoy contra cualquier reclamo social o planteamiento alternativo. El fracaso del primer gobierno de Alan García en un despeñadero de hiperinflación, que lleva a que la economía neoliberal y el ajuste permanente se presenten como los únicos caminos posibles de política económica.

La hegemonía neoliberal se construye entonces sobre la *tábula rasa* del período anterior y ello le da una vitalidad que no imaginamos desde la banda progresista. Es inaugurada además por un doble hecho surgido de lo anterior y que la refuerza: el triunfo sorpresivo de Alberto Fujimori –el outsider de la época- en las elecciones generales de 1990 y el autogolpe del mismo en abril de 1992. Elecciones y golpe de Estado dejan al resto de fuerzas inexistentes políticamente y en clara minoría social. De esta manera, la hegemonía empieza a construirse en dictadura lo que les permite a una coalición reaccionaria compuesta mayoritariamente por poderes fácticos: militares, grandes empresarios, tecnócratas, organismos financieros internacionales y la tutela de los Estados Unidos, hacerse no solo del gobierno sino del poder del Estado. La consecuencia es la captura del Estado por personal que viene de la empresa privada y los organismos de seguridad y está formado ideológicamente en los principios del neoliberalismo, poniendo especial cuidado en la mantención de su hegemonía. Esta captura persiste hasta el día de hoy y es uno de los elementos que ha permitido mantener continuidad en la dominación sobre la sociedad.

Además, esta hegemonía se construye sobre una nueva base material. Se produjo un ajuste económico en 1990 y se da un conjunto de legislación que transforma la economía entre 1990 y 1992. En resumen, se privatiza, concentra y reprimariza la economía; llevándola a que sea controlada por una docena de empresas, principalmente extranjeras, y asentadas en los negocios minero, gasífero y financiero.

Con esta captura se constituye el Estado Neoliberal con sus características de orden político excluyente, reeditando el patrimonialismo (la no distinción entre el bolsillo privado y el tesoro público) que nos ha acompañado en toda nuestra historia republicana anterior. Aloja asimismo a la república criolla como un orden institucional que se caracteriza por la debilidad de su comunidad ciudadana y de su Estado de Derecho, protagonizando de nuevo la frustración democrática republicana.

Pero esta hegemonía además se continúa construyendo en democracia. Luego de la caída y huida del Perú de Fujimori y de la captura de Vladimiro Montesinos, se da paso a una transición que regresa a un régimen democrático inscrito en el orden conservador, de democracia limitada, de la década de 1980 y en su institucionalidad en el respeto a la constitución reaccionaria, producto del golpe de Estado, que Fujimori le hace aprobar a un Congreso *ad hoc* en 1993. Esta democracia se parece más a la "democracia barata" que los norteamericanos vendieron en América Latina para salir de las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 que a una verdadera democracia representativa. La realidad de este régimen político está en la gramática de su nacimiento, se trata de una



democracia regida por la constitución de un régimen autoritario. Lo curioso es que esta democracia limitada, a la postre de minorías, se da en América Latina en los últimos quince años en contraste con el desarrollo de democracias mayoritarias, que se establecen producto del giro a la izquierda ocurrido en un número importante de países de la región. Paradójicamente todos los países de América Latina se llaman democráticos pero, al menos, existen dos formas distintas de entender la democracia.

El funcionamiento de esta democracia, sin embargo, ha estado marcado por la frustración de la población. Los gobernantes no cumplen lo que prometen y criminalizan crecientemente la protesta social. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala; han sido elegidos con plataformas de campaña que iban del centro a la izquierda del espectro político y han gobernado, abiertamente, con la derecha. Es más, no han dudado en reprimir a la población, muertos incluidos, cuando esta ha mostrado su disconformidad. 10 años de crecimiento, entre el 2003 y el 2013, a una tasa promedio del 6% anual del PBI, han doblado su volumen, pero no han beneficiado sino a una extrema minoría. Los resultados en términos de trabajo son magros, solo el 12% de la PEA (2013) tiene un trabajo con derechos en el Perú de hoy y la informalidad laboral alcanza al 78% de la población. Sin embargo, el modelo aumenta la circulación de dinero, produce ingresos eventuales y genera un crecimiento de la economía delictiva (narcotráfico, trata de personas, minería y tala ilegal y el lavado de dinero consecuente) que llega al 6% del PBI. Todo esto ha producido, en un país pobre y de pobres como el Perú, una ilusión en vastos sectores de la población entre los que se ha desarrollado una ideología "cuentapropista" promovida desde arriba, con el cuento del "emprendedurismo", que ha ayudado a borrar de la memoria colectiva los beneficios de la organización social anterior, haciendo difícil y a veces muy difícil la organización de visiones alternativas en la población.

Un hecho que ha agudizado la frustración de la población con la democracia ha sido la traición de Ollanta Humala. Una vez más los gobernantes no cumplen lo que prometen como candidatos. Ya había ocurrido con Fujimori en 1990 y había sucedido en menor medida con Toledo y García. Pero el viraje de Ollanta Humala fue de 180 grados, de crítica frontal al neoliberalismo a aceptación de la continuidad neoliberal. Fue el fracaso de un caudillismo militar postrero, una vez más entregado a la oligarquía, que no tuvo un movimiento social y político capaz de pedirle cuentas por sus acciones. Sin embargo, esta traición ha profundizado la desconfianza de la población en el sistema político como una vía para producir cambios y afianzando momentáneamente la hegemonía neoliberal.

La crisis, sin embargo, que nada más fue crisis en las alturas en los años de auge neoliberal, crisis del "quítate tú pa ponerme yo", ha empezado a tener ribetes de magnitud distinta en el último año. El detonante ha sido la crisis económica, como una crisis de modelo económico. La crisis de una forma de crecimiento basado en un modelo primario exportador, de gas y minerales, que sigue los ciclos de expansión y retracción de la economía mundial. Del promedio de la década de auge de 6% del PBI, hemos pasado al 2,8% el 2014 y bajando.

La crisis económica ha causado una agudización de la crisis en las alturas pero ha incidido también en una revitalización del movimiento social. Uno de los grandes triunfos de la hegemonía liberal ha sido en estos años la ausencia del movimiento social, tanto por el dominio ideológico como por la represión abierta, criminalizando crecientemente las movilizaciones de protesta, paradójicamente por gobiernos democráticos, entre el 2003 y el 2014. La movilización, sin embargo, a pesar de hacerse más frecuente en los últimos meses, como acciones colectivas esporádicas sobre distintos temas desconectadas territorialmente, todavía no logra convertirse en movimientos sociales permanentes que representen un desafío al poder de turno. Un buen augurio es el movimiento juvenil (ocurrido entre diciembre 2014 y enero 2015) contra la llamada "ley Pulpín", una ley aprobada en el Congreso de la República, que recortaba derechos a los jóvenes como una forma de incorporarlos al mercado de trabajo. Cinco movilizaciones nacionales, convocadas al principio de manera espontánea y luego con mayor organización, lograron que el Congreso se reuniera en vacaciones y derogara dicha ley.

La agudización de la crisis en las alturas, sin embargo, ha revelado dos cuestiones muy importantes que dejan en claro cómo esta hegemonía se ha convertido en gobernabilidad neoliberal. Me refiero a la captura del Estado por parte de los intereses privados y a los grados extremos de corrupción que se ha llegado en el manejo del mismo. Por primera vez en los últimos quince años de democracia ha quedado muy claro el nivel de captura del Estado por parte de los intereses privados. No es sólo un tema de lobby en un determinado sector o para una determinada ley, sino la captura física, poniendo a su personal a manejar las áreas del Estado que prioritariamente les interesan. Esta situación de captura hace muy clara la característica excluyente, de un Estado que defiende determinados intereses sociales en desmedro de otros.

Pero, esta captura no solo se ha convertido en manejo directo sino también corrupto del aparato estatal. Se ha querido hacer aparecer como que la corrupción es un asunto local y regional, desarrollándose al efecto una labor policial y judicial muchas veces cierta y otras motivada políticamente. Sin embrago, los mayores escándalos de corrupción, cada ves más difíciles de tapar, tienen su origen en el poder central. Específicamente, los últimos cuatro presidentes de la república (con la excepción del breve interinato de Valentín Paniagua) están o presos, como es el caso de Alberto Fujimori por ladrón y asesino, o con graves acusaciones en su contra como son los casos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Captura del Estado y corrupción al más alto nivel abonan así a un agudo desprestigio del poder político, específicamente del Estado como un Estado de todos.

Esta crisis, a pesar de sus limitaciones, deja en claro la grave quiebra de la representación política en el Perú. El gobierno de los ricos con la ilusión sino el apoyo de los pobres podría estarse terminando. Ello pone sobre la mesa, una vez más, la necesidad de una nueva representación política. Más que en las elecciones

de 2006 y 2011, en las que desde el caudillo contestatario que fue Ollanta Humala cuestionó la hegemonía neoliberal, en la actualidad hay una base material de deterioro, con el final de un ciclo de expansión de la exportación de materias primas. Ello pone a la orden del día la posibilidad de que la sociedad movilizada tenga una expresión política y se pueda constituir una alternativa ante estas múltiples crisis.

**III**

**Chile hoy: ¿dónde está la derecha?**

**Por Pedro Santander**

Hoy en Chile ya no es raro ver a los comentaristas de la plaza preguntarse por la derecha. "¿Dónde está la derecha?", pareciera ser la interrogante y el tema preferidos de variados columnistas de los medios tradicionales (casi todos de derecha también). Algunos, no pocos, son más radicales y afirman, sin mitigaciones, que "hoy la derecha no existe en Chile". Es lo que hizo en una reciente columna dominical, Sergio Melinik, connotado ideólogo del neoliberalismo criollo, ex Ministro de Planificación de Pinochet y columnista habitual, quien afirmó tajantemente que desde el inicio del gobierno de Michelle Bachelet, lo que hay es "la inexistencia de una oposición desde la derecha". Y por estos días, Manuel José Ossandón, senador del partido de derecha, Renovación Nacional y presidenciable para el 2018, hizo un público llamado a "que los chilenos pierdan el miedo a decir soy de derecha".

Puede resultar sorprendente que en un país tan conservador como Chile – que mantiene la Constitución pinochetista de 1980, que recién el 2004 aprobó una ley de divorcio y donde aún se prohíbe cualquier forma de aborto en cualquier circunstancia - se debata la invisibilidad de la derecha política. Pero la inquietud tiene sustento. En primer lugar, por el modo en que terminó el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014): éste fue apenas el segundo gobierno de derecha que gana en las urnas desde el inicio de la actual república, en 1925. En Chile la derecha siempre ha logrado el poder Ejecutivo por la fuerza. Y los resultados electorales después de cuatro años de gobierno piñerista no podrían haber sido peores: los partidos de la Alianza (Renovación Nacional –RN- y Unión Demócrata Independiente- UDI) obtuvieron el peor resultado desde el retorno de la democracia (1990), con un 36% de votos en las parlamentarias, muy debajo del 56,6% logrado por la Nueva Mayoría (NM), liderada por Michelle Bachelet, lo que en escaños significa que la NM tiene 21 senadores contra 16 de la Alianza, un independiente completa el cuadro de 38 senadores. En la Cámara de Diputados, la NM subió de 57 a 68, mientras que la Alianza bajó de 56 a 48. A ello se suma la paliza que recibieron en las presidenciales: 62% de votos para Bachelet v/s 37% para Evelyn Matthei (pero no se debe olvidar, que todos, por igual, recibieron otra paliza: la del 60% de abstención electoral).

A estas cifras se suman otras, aun más preocupantes: en el último año todas las encuestan dan cuenta, de modo persistente, de la severa crisis de legitimidad que afecta al sistema político-institucional. Tras diversos escándalos de corrupción, con nueve senadores cuestionados, financiamiento ilegal de campañas y, además, tráfico de influencia y especulación inmobiliaria protagonizados por el hijo y la nuera de la Presidenta Bachelet (quien nunca condenó con claridad esto último), la situación se ha vuelto preocupante para el bloque de poder, conformado por la Nueva Mayoría y la Alianza. La coalición de gobierno (Nueva Mayoría) posee un 74% de rechazo ciudadano y sólo un 16% de aceptación, pero la derecha (la Alianza) no puede sacar cuentas alegres, pues ha tenido nula capacidad para capitalizar ese descrédito: tiene el 75% de rechazo y el 15% de aceptación. O sea, empate en el desastre entre oficialismo y derecha, al que se suma el de la misma presidenta Bachelet, con un 24% de apoyo y un 72% de rechazo.

Se trata de un cuadro que da verdaderaente cuenta de una crisis de elite por la que atraviesa el país y que afecta por igual a todos los integrantes de este bloque: la legitimidad de la Presidenta, del gobierno, de los partidos oficialistas y de derecha está por el suelo. Lo novedoso de los datos es que todos los actores políticos del bloque se mueven igual, es decir, todos a la baja. No ocurre lo que uno podría esperar en un sistema más sano y competitivo, que si el gobierno sube en aprobación, baje la oposición o viceversa. No, en Chile hoy el movimiento es uno solo: todos a la baja en aprobación, credibilidad e identificación. En ese sentido, parece claro que la ciudadanía interpreta de manera compacta a todos los actores, sean de gobierno o de oposición, como integrantes de un mismo bloque.

En este complejo cuadro, la derecha se lleva la peor parte. No sólo finalizó su gobierno con una deblace electoral, también se suma a ello una incipiente dispersión partidaria del sector. Si Piñera asumió la presidencia con una Alianza conformada por la UDI y RN, después de su final comenzó la dinámica centrífuga y de esos mismos partidos salieron dos nuevos referentes, Evópolis y Amplitud, impulsados por parlamentarios de derecha, en una división que, entre otros, busca romper con la herencia y adhesión pinochetista que aún se aprecia firmemente en RN y la UDI. El panorama es pues cuasi-catastrófico para la derecha política chilena y lo sería plenamente si la Nueva Mayoría y su Presidenta no estuvieran igual de mal evaluados.

Pero, ¿permite todo lo anterior afirmar la cuasi desaparición de la derecha en Chile? Pues afirmar sin más, como muchos lo hacen por estos días, que "la derecha no existe", entraña cierto engaño, porque, ¿qué es ser de derechas en Chile sino defender la institucionalidad socio-económica heredada de la dictadura de Pinochet que hasta hoy nos condiciona? La Constitución política es la de 1980, el Plan Laboral es de 1979, el Código de Agua es de 1982, así como la Ley de Telecomunicaciones; el sistema de seguridad social es el mismo que se comenzó a implementar en 1981; las compañías mineras no pagan impuestos; las FF.AA. siguen con sus pactos de silencio en torno a los crímenes de lesa humanidad y continúan disfrutando de una ley reservada pinochetista que les transfiere anualmente el 10% de la ventas del cobre, el agua está totalmente privatizada, el

Estado, por mandato constitucional, cumple sólo un rol subsidiario y la estructura mediática es oligopólica e ideológicamente de derechas. Es decir, el modelo socio-económico instaurado por la dictadura pinochetista, neoliberal en extremo, goza de buena salud en Chile, uno de los países más desiguales del mundo.

La pregunta entonces es evidente, ¿cómo es posible, si la derecha política es tan débil? Para responderse eso, lo fundamental es entender que esta institucionalidad neoliberal pospinochetista no sólo ha sido defendida por la derecha política tradicional, lo que es esperable y políticamente lógico, sino también por sectores importantes, mayoritarios y hegemónicos de la coalición de gobierno, la misma que se autoclasifica de "centro-izquierda". Sin embargo, más allá de estas autodescripciones, desde 1990 la llamada Concertación de Partidos por la Democracia (arco que va desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana) poco ha hecho por modificar los marcos postpinochetistas de convivencia que heredamos. Casi nada queda de las promesas originales de su programa. Aún no se deroga la Ley de Amnistía, tampoco se ha alterado un milímetro el modelo de seguridad social que es uno de los pilares de los actuales grupos económicos y causante de una vejez miserable. Si cuando terminó la dictadura el 70% de los recursos naturales estaban aún en manos del Estado, hoy la cifra se ha invertido y sólo el 30 % es estatal. Los servicios estratégicos están todos en manos privadas, somos el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, y, por supuesto, geopolíticamente siempre muy cerca de EE.UU., de hecho, junto con España y EE.UU., Chile fue en 2002 el único país en reconocer oficialmente el gobierno del empresario Pedro Carmona, tras el golpe contra Chávez, y eso bajo la presidencia del socialista Ricardo Lagos. Nuestro sistema tributario es fuertemente regresivo, la educación está privatizada totalmente, el sector exportador –absolutamente rentista- goza de beneficios tributarios y subsidios directos multimillonarios, y así un largo etcétera de hechos que podrían seguir siendo enumerados y que dan cuenta de un país fuertemente derechizado en lo económico, lo geopolítico y lo político.

Entonces, ¿dónde está la derecha? Claramente, la derecha económica está donde mismo. Es la derecha política la que ha mutado y hoy no sólo la encontramos en la reducida oposición política, sino también en la propia coalición de gobierno. Es decir, somos un país institucional y económicamente de derechas, pero gobernados por una coalición (la NM) que se autodenomina de centro-izquierda. Todo esto resulta hoy mucho más difícil de ocultar después de los escándalos de financiamiento ilegal de campañas políticas, tema que ha copado la agenda del 2015 y en el cual la Fiscalía ha demostrado cómo los grandes grupos económicos ligados a sectores mineros, pesqueros y a la banca han financiado, por igual, a políticos de la derecha y del oficialismo. De hecho, la primera en denunciar esto fue en 2013 la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei quien compitió contra Bachelet, cuando se quejó de que la actual Mandataria estaba recibiendo más aportes de los grupos económicos que ella. "Es cosa de mirar, son tres a cuatro veces más que lo nuestro y eso no se consigue si no le donan las empresas. Por lo tanto creo que el tema del financiamiento que realmente ha sido grosero, y es muy

importante que veamos de dónde salió todo ese dinero", dijo Matthei en noviembre de 2013.

El problema para la derecha económica y los guardianes del modelo es que Michelle Bachelet – obligada por "la calle", es decir, por la presión de los movimientos sociales que desde el 2011 han vuelto a ser actores con incidencia política- triunfó con una oferta ligeramente socialdemócrata que prometió cuatro reformas estructurales: tributaria, educacional, constitucional y laboral. Es decir, ganó en las urnas ofreciendo un programa que políticamente significaba poner fin a la institucionalidad postpinochetista. Para lograr una gobernanza que diera sustento a esa promesa, se puso fin a la "Concertación de Partidos" y, sumando ahora al Partido Comunista, se creó la "Nueva Mayoría", debía ser ésta la responsable de llevar adelante las transformaciones. El proyecto de la Nueva Mayoría se impuso en la elaboración del programa electoral porque, por un lado, el descalabro del gobierno de Piñera, provocado por las movilizaciones populares, erosionó discursivamente al conjunto de los sectores conservadores para las elecciones del 2013, y, por otro, porque las fuerzas sociales y políticas más radicales, de izquierda, fuimos incapaces de levantar una alternativa electoral que disputara hegemonía.

A poco andar, las tensiones al interior de la nueva colación, entre quienes quieren llevar adelante las reformas y quienes prefieren el *statu quo,* se han hecho evidentes. Cumplido apenas un año de gobierno, Bachelet cambió a su Ministro de Interior y al de Hacienda (ambos identificados con los cambios) y puso en su reemplazo a otros dos identificados con los sectores más conservadores y neoliberales. "Salió la Nueva Mayoría y volvió la Concertación", se dice ahora. En ese sentido, lo que vemos en Chile es que ante la debilidad de la derecha política, desprestigiada y con poco peso parlamentario, la restauración conservadora, dirigida por los principales grupos económicos, está a cargo de un sector del propio oficialismo. Entre medio quedó la presidenta quien para explicar al país la lentitud de las reformas, y fiel a su errático y confuso estilo, dijo que se trata de "realismo sin renuncia", y entonces, mientras unos enfatizan el "realismo", otros se las juegan por el "sin renuncia".

Pero hoy, a poco más de un año de gobierno, el inocultable fracaso de la Nueva Mayoría, su debilidad para efectivamente implementar las reformas, sumados al desprestigio presidencial, ha dado paso al dominio del viejo "partido del orden". Su objetivo inmediato es estabilizar la situación y desalojar a "la calle" del escenario político e impedir las reformas. En esa lógica, el "fuego amigo" ha sido el más artero contra Bachelet. Ministros, ex ministros, ex presidentes como Ricardo Lagos, presidentes de partidos como el de la Democracia Cristiana, han tomado bando por la restauración conservadora. En paralelo, gracias al la naturaleza concentrada y derechista de la prensa chilena, se ha iniciado una campaña de rumores que apuntan directamente a la capacidad de gobernar de la presidenta, por supuestos problemas personales, de salud, de estado de ánimo, etc. Esta estrategia político-comunicacional ha logrado que el gobierno tuviera que desmentir pública y oficialmente que el estado de salud de la presidenta está afectado. Todo esto

tendría como telón de fondo impedir que Bachelet finalice su mandato (2014-2018), si insiste en las reformas. A tanto ha llegado esta campaña que el senador oficialista, Alejandro Navarro, cercano a la presidenta, ha pedido que se aplique el Artículo 133 del Código Penal (contra la sedición) a quienes están “promoviendo un quiebre institucional”. En paralelo, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, señaló que “hay bastantes componentes de sedición contra la Presidenta, pero es una sedición que no va a llegar muy lejos”.

Así las cosas, a poco más de un año de gobierno, el antagonismo se ha instalado intensamente al interior del bloque oficialista, la tensión se manifiesta entre quienes defienden el modelo (o sea, la herencia neoliberal de la dictadura) y quienes quieres introducir ciertas modificaciones, levemente socialdemócratas. Aunque no está claro si dicha tensión obedece a cuestiones de principios, es decir, a diferencias político-ideológicas, o es una pugna de poder en torno a modos de gobernanza para enfrentar la crisis de elite e impedir cualquier avance de la izquierda. Sí está bastante más claro que apenas un año duró el proyecto refundacional de la Nueva Mayoría, las fuerzas reaccionarias no tardaron más que eso en frenar todo impulso transformador que proviniera de las filas oficialistas y arrinconarlo. No hay dudas pues que la derecha goza de buena salud en Chile, aunque a veces cambie de traje y hasta de domicilio, nunca cambia sus intereses y objetivos.